

Embajada 7/7/84
de la
República Argentina

Washington, D.C.

Argentina
SUM
AM 035
R

D.E. 587

La Embajada de la República Argentina presenta sus atentos saludos al Departamento de Estado y tiene el honor de poner en su conocimiento, de acuerdo con instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, algunas reflexiones relacionadas con la política de Derechos Humanos, sus antecedentes, posición asumida por el Gobierno Constitucional y medidas destinadas a restablecer la vigencia de los mismos en la República Argentina.

I - Causas de la violencia

Las causas de la violencia fueron definidas por S.E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dante Caputo, en el discurso que pronunciara ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en el mes de febrero último, y que en su párrafo específico señala: "Desgraciadamente la emergencia de formas autoritarias de gobierno, al coartar las libertades políticas e imponer la fuerza como fuente de poder, creó un clima propicio para que en una juventud frustrada y desconcertada encontraran eco los apóstoles de la violencia los grupos terroristas de distinto signo que preconizaban como método de acción el atropello de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad. Fue así como los terroristas, movidos por el delirio de una supuesta liberación y estimulados más de una vez desde el exterior, arrastraron a muchos jóvenes hacia matanzas, secues-

ARGENTINA PROJECT (S200000044)

U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS

Margaret P. Grafeld, Director

☒ Release ☐ Excise ☐ Deny

Exemption(s):

Declassify: ☐ In Part ☐ In Full

☐ Classify as ☐ Extend as ☐ Downgrade to

Date Declassify on Reason

AL DEPARTAMENTO DE ESTADO

840220

3462

tros crueles e irracionales, cuyo único resultado consistiría en desencadenar una terrible acción represiva, ejecutada por aparatos de represión estatal y paraestatal que arrasaron las instituciones y libertades en nuestro país. Se creyó que cualquier medio era válido: que todos los valores podían ser desconocidos, que las instituciones podrían ser abrogadas. Y así, tal como lo dijera el Presidente Alfonsín durante la campaña electoral, al combatir al demonio con las armas del demonio, la Argentina se convirtió en un infierno."

II - Posición del Gobierno frente a la violencia.

Las autoridades constitucionales que asumieron el Gobierno el 10-12-83 habían hecho del tema de los derechos humanos uno de los aspectos fundamentales de su campaña electoral.

Inmediatamente después de la asunción del poder, el Gobierno adoptó una serie de medidas tendientes a erradicar la violencia y asegurar la vigencia integral de todos los derechos humanos:

- "1. Los derechos humanos son derechos que los hombres tienen por el solo hecho de ser hombres y con independencia de cualquier circunstancia contingente, como su reconocimiento jurídico, las características de cada sociedad, o los rasgos distintivos de los individuos.
2. Todo gobierno pierde su legitimidad moral si infringe sistemáticamente los derechos fundamentales del hombre, ya que la justificación básica de los gobiernos reside precisamente en la preservación de tales derechos.
3. La función principal de los derechos humanos es amparar intereses vitales de cada individuo frente a pretensiones de otros individuos o de la sociedad en su conjunto. Ellos no pueden ceder frente a presuntas consideraciones de utilidad o bien común, desde que tienden a impedir que los

hombres sean utilizados como meros medios en beneficio de otros hombres o de entidades colectivas.

4. Los derechos humanos se violan no solo por acción sino también por omisión. Ellos son avasallados tanto cuando los hombres son agredidos activamente en su vida, integridad corporal y libertad, como cuando no se les proporcionan los medios para una subsistencia digna y para el pleno ejercicio de la autonomía personal.

5. La preservación de los derechos humanos constituye un interés legítimo de cualquier individuo o asociación. Ella excede el marco de la soberanía y de los poderes del Estado, concerniendo también a la comunidad internacional.

III - Algunas medidas en favor del restablecimiento y vigencia de los derechos humanos.

1. Creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el fin de que reciba las denuncias presentadas por miles de personas desaparecidas durante el Gobierno anterior y presente sus conclusiones en una fecha próxima, remitiendo el material probatorio obtenido a la justicia competente en la materia.
2. Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la ley de amnistía dictada por el gobierno de facto, puesto que esta antes que una pacificación lo que ^{se} proponía era la impunidad de los autores de tanta violencia.
3. Impugnación de condenas dictadas a civiles por tribunales militares.
4. Modificación del Código Penal de la Nación en materia penal sobre excarcelación.
5. Modificación del Código Penal de la Nación en materia de condena condicional y de reincidencia.
6. Reducción de penas para quienes, procesados o detenidos, hubiesen estado detenidos en el periodo que abarca 1976 a 1983, debido a

las pésimas condiciones carcelarias imperantes en ese lapso.

7. Ratificación de la Convención americana sobre derechos humanos y envío al Congreso con la misma finalidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales.
8. Creación de una comisión para investigar la desaparición de niños, en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y familia.
9. Se derogó la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía del Gobierno de Facto.
10. Recemplazo de funcionarios judiciales. Nombramiento de nuevos jueces con acuerdo del Senado. Constitución de una nueva Corte Suprema de Justicia.
11. Creación de la Dirección General de Derechos Humanos en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
12. Creación de la Comisión Nacional para el retorno de los argentinos en el exterior.
13. Invalidez de los procesos llevados a cabo por el Gobierno de Facto con relación a gobernantes constitucionales.

Cabe señalar que esta enumeración no es taxativa y se propone solamente ejemplificar algunas medidas concretas.

IV - Procesamiento a los culpables de la violencia.

En este contexto y con la firme convicción de consolidar el proceso de pacificación nacional dentro del marco de la constitución y de la ley, el Gobierno Nacional no podía eludir sus responsabilidades y dejar de instar acción penal contra los máximos responsables de la violencia desatada.

Nada de lo dicho o realizado tendría valor si no se procesara a los cultores del terror de uno y otro signo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por decretos números 158/83 y 280/84, someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas:

a los integrantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder a partir del 24 de marzo de 1976. Se trata de los Tenientes Generales Jorge R. Videla, Roberto E. Viola y Leopoldo F. Galtieri, Los almirantes Emilio E. Massera, Armando R. Lambruschini y Jorge I. Anaya y los Brigadieres Generales Orlando R. Agosti, Omar D.R. Graffigna y Basilio Lami Dozo. Igualmente al ex-jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, General (R) Ramón J. Camps.

Por decreto N° 157/83 el señor Presidente de la Nación ordenó el procesamiento de los ciudadanos Mario E. Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo A. Obregón Cano, Rodolfo G. Galimberti, Roberto C. Perdía y Enrique H. Gorriaran Merlo, por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros.

Con relación a los juicios a militares, por imperio constitucional y jurisprudencia pacífica en toda la historia institucional argentina, estos deben, necesariamente, ser llevados ante los tribunales militares.

Respetando siempre el principio de juez natural, pero para reforzar el control de la justicia civil, el Poder Ejecutivo Nacional propuso una ley, que luego fue sancionada y promulgada, por la que se dejará sin efecto el fuero militar en el futuro y además se previó que en el caso de los actuales procesos, la sentencia de los tribunales militares pueda ser apelada ante instancia civil (Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal) con posibilidades para las Partes de producir nuevas pruebas. Además la ley fijó un plazo perentorio a los tribunales militares, de seis meses para expedirse.

Esta actitud del Gobierno pone de manifiesto su voluntad de que tarde o temprano pueda intervenir la justicia civil en estos asuntos y nos muestra además que a pesar de encontrarse frente a disposiciones que imponían el fuero militar (que la oposición mayoritaria de-

fendió férreamente), el Gobierno sancionó una ley que logra un equilibrio equitativo frente a todos los artífices de la violencia, al abrir una vía de apelación permitiendo que en todos los casos intervega la justicia civil.

Más allá de la complejidad que implica la sustanciación de los juicios militares, frente al manifiesto retraso de éstos, el Poder Ejecutivo Nacional instó recientemente, a que estos se expidieran con prontitud.

V - El caso Firmenich.

Se procesa al señor Mario Eduardo Firmenich en seis causas en las que se le imputan delitos contra la vida y bienes de ciudadanos argentinos cometidos con posterioridad a la instalación del gobierno democrático, en el año 1973, en el que por disposición de ese gobierno, mediante una amplia y generosa ley dictada con el propósito de poner punto final a una etapa de enfrentamiento entre los argentinos se dispuso la amnistía a los delitos por el cometidos con anterioridad a esa fecha. No obstante esto Firmenich desoyendo el llamado a la pacificación y reconstrucción nacional continuó el camino de la violencia atentando contra el nuevo gobierno democrático, a efectos ya de no resistir la opresión de un gobierno militar sino de llegar al poder mediante ella. Este accionar derivó en la obstrucción de la acción gubernativa de los representantes democráticos elegidos y sirvió como pretexto para que un grupo de insurrectos alterasen el orden constitucional que, mediante la instauración de un sistema represivo ilegal que deterioro enormemente las condiciones de vida de nuestro pueblo, eliminó físicamente a parte de la cúpula terrorista a la que pertenecía Firmenich.

El firme propósito de nuestro Gobierno de afianzar la justicia y consolidar la paz interior consignados en nuestra Constitución Nacional nos ha llevado a solicitar la extradición de Mario Eduardo Firmenich para ser juzgado por los tribunales constitucionales por los de-

delitos cometidos con posterioridad al mes de mayo de 1973. Si bien en todas estas causas los delitos imputados son susceptibles de ocasionar la extradición porque en ninguno de ellos se lo persigue por delitos de opinión, el Gobierno Nacional manifestó reiteradamente que debe respetar la decisión del Supremo Tribunal Federal del Brasil, que el 20 de junio de 1984, al conceder la extradición solicitada lo hizo con la reserva que no se lo procese por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas de guerra y explosivos, crímenes contra la paz pública y falsificación de documentos. Se ha permitido el procesamiento por los delitos de: tentativa de homicidio con resultado de lesiones y daño en grado de instigación (causa Alemann, Juan, víctima tentativa de homicidio, Nino, Ventura Delfor y Consiglerí, Silvio, lesiones en su perjuicio). Homicidio calificado reiterado en grado de instigación (causa Pirelli, Enrique Horacio y otro s/ infracción al Art. 189 bis del Código Penal). Doble homicidio calificado en concurso real con secuestro extorsivo en carácter de partícipe primario (causa Santoro, Conrado y otro s/ privación ilegal libertad y doble homicidio), y estos serían, cumpliendo con la decisión del Supremo Tribunal Federal del Brasil, los únicos delitos que podrían dar lugar a su condenación.

Garantías Específicas

Más allá de las garantías que, tradicionalmente, nuestro Gobierno da a los gobiernos a los cuales pide la extradición de un determinado procesado, nuestro derecho positivo, especialmente en etapa de vigencia plena de la constitución y de las leyes, como la presente, protege la integridad física y moral de todos los detenidos, estableciendo una serie de garantías jurídicas en su beneficio. Por lo tanto, el señor Firmenich no constituirá, por cierto, ninguna excepción.

Podrá ser asistido por abogados de su confianza y si no los tuviera, lo defenderá un defensor oficial (Art. 255; Código Procesal Criminal de la Nación).

No podrá ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, ni juzgado por comisiones especiales (Art. 18 de la Constitución Nacional).

No podrá ser condenado sin juicio previo (Art. 18 de la Constitución Nacional).

Si se produce una modificación legal durante el procesamiento, o aún durante una eventual condena, se estará al principio de la ley más benigna (Art. 2º del Código Penal).

En caso de duda resultará absuelto (Art. 13 del Código Procesal Criminal de la Nación).

Nuestro derecho garantiza dos instancias procesales, aunque si se hubieran violado principios constitucionales o hubiera manifiesta arbitrariedad en el fallo, se llega por apelación aún hasta la Corte Suprema de la Nación.

No podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho (Art. 7º del Código Procesal Criminal de la Nación).

Aún en el caso hipotético de resultar condenado, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los presos detenidos en ellas.

La Embajada de la República Argentina reitera al Departamento de Estado las expresiones de su más alta y distinguida consideración.

Washington, D.C., 17 de julio de 1984.

